LAS FOSAS COMUNES DE LA GUERRA CIVIL

Análisis historiográfico

Judith Giménez Porcel
Universidad de Barcelona (UB). Facultad de Geografía e Historia
Tutor: Jordi Ibarz
27 de mayo de 2013

SUMARIO:

1. INTRODUCCIÓN	4
2. EL CONTEXTO HISTÓRICO	6
3. ANALÍISIS HISTORIOGRÁFICO	14
4. CONCLUSIONES	30
5. BIBLIOGRAFÍA	33

LAS FOSAS COMUNES DE LA GUERRA CIVIL: ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO

Judith GIMÉNEZ PORCEL

Resumen

En este texto se analiza la circulación y producción de relatos e imágenes de la represión y el terror que ha suscitado en España la guerra civil, y en particular aquellas imágenes y relatos asociados a las exhumaciones de las fosas comunes. En una sociedad con fuertes creencias en la pervivencia del espíritu tras la muerte, una cultura que almacena sus muertos en lugares revestidos de respeto y dignidad denominados cementerios, donde continuamente se hacen ofrendas florales y oraciones en memoria de los difuntos, resulta traumático los asesinatos de los cuales se ignora el lugar de inhumación y que, en el peor de los casos, ni siquiera fueron inscritos en el registro civil.

Palabras clave: España, guerra civil española, fosas comunes, exhumaciones, represión, memoria histórica, Antropología, Arqueología.

Abstract

In this paper we analyze the circulation and production of stories and images of repression and terror that civil war has sparked in Spain, and in particular those images and stories associated to the exhumation of the mass graves. In a society with strong beliefs in the survival of the spirit after death, a culture that stores their death in places covered with respect and dignity called cemeteries, where wreaths and prayers in memory of the deceased are made continuously, it is traumatic these killings from which we ignore the place of burial and, in the worst case, even where were they registered or at which civil registry.

Keywords: Spain, Spanish civil war, mass graves, exhumations, repression, historical memory, Anthropology, Archaeology.

1. INTRODUCCIÓN

En este texto analizo la circulación y producción de relatos e imágenes de la represión y el terror que ha suscitado en España la guerra civil, y en particular aquellas imágenes y relatos asociados a las exhumaciones de las fosas comunes. Excavaciones llevadas a cabo en distintos puntos del país y que han sacado a la luz lo que Francisco Ferrándiz ha definido como *los escenarios del crimen*. Una imagen que sigue suscitando discusiones acaloradas y diversos tipos de iniciativas en el ámbito familiar y político, en la historiografía, los medios de comunicación, el mundo de la cultura y el espacio público en general. Así, por ejemplo, la exhibición ante la opinión pública de esqueletos y calaveras que presentan signos de violencia, ha sacado a la luz historias trágicas que durante décadas han permanecido silenciadas (FERRÁNDIZ, 2011:668).

Sin embargo, tales relatos deben ser considerados en el contexto más amplio en torno a la guerra civil y la implantación de una dictadura donde la violencia y las actividades represivas fueron una constante. Una violencia que “(...) *no se limitó a los encarcelamientos o las ejecuciones sino también a la intimidación, la extorsión, la vigilancia permanente y cotidiana, el hambre, el acoso, las violaciones o la misoginia (...)*” (CASANOVA, 2004: X). Una nueva España donde espiar y delatar al otro era el primer acto de compromiso con el nuevo régimen. Un estado de terror que transformó la sociedad española, destruyó familias enteras e inundó la vida cotidiana de silencio, miedo y castigo. Unas prácticas represivas que, según Francisco Ferrándiz, “(...) *fueron particularmente asfixiantes en contextos locales y rurales*” (FERRÁNDIZ, 2011:668). Así, durante mucho tiempo el panorama español quedó dividido entre “vencedores y vencidos”, “patriotas y traidores”, “nacionales y rojos”. Un conflicto bélico que fue seguido de una larga *paz incivil* donde “*las cárceles, las ejecuciones y el exilio condujeron a republicanos, izquierdistas y organizaciones obreras a un túnel sin salida*” (CASANOVA, 2001:22).

En este contexto, el objetivo final del trabajo es realizar un balance historiográfico en torno a una cuestión que ha generado y, sigue generando aún hoy, un intenso debate: las fosas comunes. Tumbas silenciadas y ocultadas por el bando vencedor y que son una prueba irrefutable de la barbarie. En este sentido, Francisco Ferrándiz plantea que “*en un momento en el que la sociedad se halla inmersa en un importante debate en torno al carácter singular o plural de su identidad y a la estructura de la organización*

territorial, las exhumaciones de fosas comunes está arrojando una luz inquietante sobre nuestro pasado, nuestro presente y acaso también nuestro futuro” (FERRÁNDIZ, 2011:668). En torno a este debate, aquellos que argumentan que localizar, señalar y exhumar las fosas comunes es reabrir las heridas del pasado, cabría preguntarles si un país democrático puede permitirse que miles de personas asesinadas permanezcan en el olvido. Desde mi punto de vista, la dignificación de las víctimas, sin distinguir entre los muertos en el frente o las víctimas de la represión, es una apuesta para el futuro. Viejas heridas sin cicatrizar que representan un obstáculo para seguir avanzando. Una realidad que sigue presente y que debe dejar de representar “la conciencia vergonzante de una transición que, mientras siga echando tierra en ellas, no habrá pasado esa espantosa página de nuestra historia (...)” (SILVA, 2003:57). En este sentido, la Administración Pública, en vez de mirar para otro lado, debería ayudar a los descendientes que deseen recuperar a sus familiares colaborando así a que se conviertan en un símbolo de reconciliación nacional entre los españoles y no en un pasado que deba ser ocultado, en un episodio que deba ser olvidado.

A esta sensibilidad aún latente, se le añade la complejidad del proceso exhumatorio. Se trata de un estudio que debe ser abordado desde diferentes disciplinas siendo conscientes de sus propios ámbitos de actuación. Así, desde el campo de la Arqueología – aporta una metodología y técnicas propias que permiten abrir la fosa y extraer los restos-; desde el campo de la Antropología Forense – el estudio de los restos que permitan determinar si era hombre o mujer, si sufrieron fracturas *ante mortem* o *post mortem*, si presentan indicios de disparo por arma de fuego, etc.-. A esto se le añade las aportaciones desde el punto de vista psicológico sin olvidar la enorme implicación jurídica que hay alrededor de las fosas comunes (BARJAU, 2007:61).

Una temática escogida a partir de mi inquietud personal por profundizar sobre lo escrito acerca de las fosas comunes. Un interés personal que nació a partir de mi colaboración en la exhumación llevada a cabo en la zona de Cádiz. Los restos óseos y efectos personales encontrados dibujaban una imagen de la barbarie sufrida por la población, personas desconocidas para mí y que, sin embargo, tenían una historia que había sido enterrada. A partir de entonces, las fosas comunes y la violencia empezaron a ser el centro de mis lecturas y, a lo largo de mis reflexiones, suscitaron algunas de las cuestiones que he tomado como marco de referencia, sin pretender responderlas en este momento debido a su dificultad, como ¿Qué son realmente las fosas comunes? ¿Qué

problemática suscita su estudio en la actualidad? ¿Qué implicaciones ha tenido la Ley de la Memoria Histórica en su tratamiento? o, ¿Qué motivos hay detrás de las acciones dirigidas a la búsqueda de algún antepasado?

2. CONTEXTO HISTÓRICO

La guerra civil española y sus consecuencias han incidido en la conciencia de las generaciones posteriores. Un conflicto que, durante décadas, contribuyó de forma inevitable a moldear la vida de millones de españoles. Sin embargo, la tragedia española no fue, ni mucho menos, la única que tuvo lugar en aquella Europa que, desde 1914 a 1945, presencié “(...) *el derrumbe de sus tres grandes imperios, la formación de varios estados nuevos, dos guerras mundiales, varias revoluciones frustradas y una triunfante, y el ascenso y caída de los fascismos*” (CASANOVA, 2004:3). Un contexto que viene a reflejar que, a finales de la década de 1930, lo raro era un régimen democrático, y lo normal eran sistemas dictatoriales que aniquilaban los derechos humanos para crear lo que Javier Rodrigo ha definido como “una *“nueva civilización” basada en la militarización de la política, la sacralización del Estado y la primacía absoluta de la nación como comunidad étnicamente homogénea*” (RODRIGO, 2008:54). Una Europa que vivió su mayor y más generalizada crisis y que trajo, fundamentalmente, violencia. Unas rivalidades no exclusivamente político-militares entre dos contendientes sino que “*se trató, sobre todo, de una crisis social, con rasgos manifiestos de lucha de clases, integración nacional y, en el caso español, importantes divisiones religiosas*” (CASANOVA, 2001:2). En el caso español, “*lo que ocurrió a partir de 1936 fue, no sólo una lucha de clases por las armas sino también una guerra de religión, de nacionalismos, una guerra entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, una guerra en la que por primera vez se enfrentó el fascismo y el comunismo*” (JULIÀ, 1999:17).

Un conflicto que, Eduardo de Guzmán definió como “*la más cruel y despiadada de las contiendas fratricidas*” (citado en AGUILAR, 2006:31). Una definición a la que hacen referencia autores como Javier Rodrigo, Santos Julià o Paloma Aguilar, y en la que subyace ese carácter interno, ese enfrentamiento entre miembros de una misma sociedad, ese intento de zanjar viejas rencillas irresueltas. Para Antony Beevor, empero, es erróneo calificarla así ya que “*el conflicto despojó a sus oponentes “traidores” tanto*

de su condición humana como de su ciudadanía. Así, los hermanos eran extraños sin rostro, y a sindicalistas y tenderos en enemigos de clase” (BEEVOR, 2005:7).

Otros la han considerado como el resultado del choque entre la derecha y la izquierda. Pero esta afirmación resultaba engañosa ya que *“el conflicto tenía otros dos ejes: centralismo estatal contra independencia regional, y autoritarismo contra libertad del individuo” (BEEVOR, 2005:7).* En conclusión *“Su historia está cargada de mitos y múltiples explicaciones. Algunas de éstas son muy simples y directas: detrás de esos conflictos siempre hay “odios ancestrales”, de clase, étnicos o religiosos. Otros enfoques prefieren sumergirse en aguas más profundas y tratan de identificar los factores que hacen a algunas sociedades más propensas a la violencia que otras” (CASANOVA, 2001: IX).* Más allá de estas explicaciones, la realidad es la misma: conflictos crueles y sangrientos donde la violencia purificadora ha traspasado fronteras, desde Finlandia a El Salvador, desde España a Ruanda. Conflictos donde existió un miedo a la revolución, a la destrucción de los valores tradicionales y el ordenamiento sociopolítico haciéndose patente lo que Hobsbawm ha definido como *“los fantasmas de 1917” (RODRIGO, 2008:55).* Una guerra civil española que fue una guerra de desgaste pensada desde sus inicios para durar y dañar, y llevada a la práctica mediante la técnica del terror y la barbarie (RODRIGO, 2008:18). Recordemos, en este caso, las palabras de Franco:

En una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada de una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje el país infestado de adversarios (RODRIGO, 2008:17).

Entre el 17 y el 19 de julio de 1936, se llevó a cabo un golpe de Estado perpetrado por una parte del Ejército español contra el gobierno de la República. Una República que no fue un simple cambio de régimen sino más bien la promesa de un cambio de vida donde la clase obrera mejoraría su miserable condición, donde las mujeres accederían a la esfera pública, donde los niños y jóvenes recibirían una nueva educación que acabaría con la lacra del analfabetismo o donde los campesinos accederían a las tierras que trabajaban. En definitiva, un nuevo escenario de debate y libertad en el que poder solucionar muchos de los problemas pendientes. Viejas rencillas irresueltas que la República fue incapaz de solucionar: crisis económica, rivalidades entre dos prácticas sindicales irreconciliables – anarcosindicalistas y socialistas- o la reacción hostil de los

grupos terratenientes. Una creciente tensión que las elecciones del 16 de febrero de 1936, con la victoria del Frente Popular, no consiguió solucionar iniciándose así una guerra civil dada por acabada el 1 de abril de 1939 tras un comunicado del general Franco, donde decía *“la guerra ha terminado”* (VILAR, 1988:89).

Pero, no se puede obviar un aspecto relevante del conflicto. A la insurrección de Franco, en julio de 1936, se le sumó una revolución social sin precedentes. Una revolución que involucró a masas de trabajadores urbanos y rurales en la lucha por una transformación radical de las condiciones sociales y económicas. Una lucha que continuó hasta que fue aniquilada por la fuerza. Algunos estudios históricos recientes han tratado esta revolución como un impedimento para conseguir la victoria ante la rebelión de Franco. En opinión de Noam Chomsky, *“Muchos historiadores estarían probablemente de acuerdo con Eric Hobsbawm cuando dice que el fracaso de la revolución social en España, fue culpa de los anarquistas, que los anarquistas eran un desastre, una especie de gimnástica moral sin resultados concretos (...)”* (CHOMSKY, 2004:61). Una revolución que parece haber huido de la memoria y que, sin embargo, transformó a una gran parte de la sociedad española.

La victoria de los sublevados trajo consigo la instauración de una férrea dictadura cuya peculiaridad radicaba en el hecho de que se había estructurado durante la confrontación (DI FEBRO, 2005:9). El final del conflicto dejó una España sumida en el agotamiento material y psicológico, donde *“La subsistencia diaria y la recuperación de un país destruido eran problemas abrumadores. Las carreteras estaban destrozadas por el paso militar, las bombas y la falta de reparación; los puentes habían desaparecido, y los automóviles y los camiones se encontraban viejos y sin recambios (...)”* (HERR, 2004:281). A esto se le sumaba la pérdida de mano de obra no sólo por las muertes de jóvenes en edad de trabajar sino porque *“casi medio millón de personas, soldados, funcionarios, civiles, simpatizantes republicanos y sus familiares, habían huido del país, la mayoría a Francia, donde fueron confinados en campos de refugiados”* (HERR, 2004:281). Una situación caótica en la que, sin embargo, permaneció inalterable el poder personal de Franco así como el empleo de una dura y constante represión (DI FEBRO, 2005:10).

Pero, ¿por qué hablar de represión en vez de guerra civil? La razón es que en gran parte de España lo que sucedió fue sólo represión, de modo que al golpe militar siguió

directamente el plan de exterminio (ESPINOSA, 2006:171). Una violencia que *“al margen de la omnipresencia de la represión y sus víctimas en el debate público, al margen de los interesados usos políticos (...) es un elemento crucial a la hora de explicar la Guerra Civil por más que, en una escala global, ésta no sea tan relevante ni desde un punto de vista tecnológico ni en cuanto a pérdidas humanas como otros conflictos bélicos del corto siglo XX”* (RODRIGO, 2008:25). Y lo es, fundamentalmente, porque marcó las vidas de miles de personas más incluso que las operaciones militares. Un pasado donde los fusilamientos, las fosas comunes, las cárceles legales o clandestinas, los campos de concentración y de trabajo forzoso, sobrevuelan *“prácticamente todos los relatos sobre la contienda y que aún hoy es elemento primordial del interés público sobre el enfrentamiento civil”* (RODRIGO, 2008:25).

Una violencia que dejó cicatrices duraderas en la sociedad. Un método de asesinato que combinó las matanzas indiscriminadas con los ejecutados por tribunales nombrados sobre la marcha. Así lo constatan algunos autores cuando afirmaban que una de las principales causas de mortalidad en España, entre 1936 y 1937, fue el resultado directo de la represión. Julián Casanova expone que en el bando golpista, el clima de terror impuesto dejó 100.000 personas asesinadas durante la guerra civil y otras 50.000 en la *paz incivil* que siguió. Mientras, en los lugares donde fueron derrotados los militares sublevados, alrededor de 60.000 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas, como en el otro bando, sin ninguna garantía “legal” (CASANOVA, 2001:24). Francisco Espinosa, por su parte, señala una cifra aproximada de 300.000 personas desaparecidas, pero esto es sólo un número redondo, un punto de partida ya que *“sólo con los datos que contamos del suroeste (Andalucía occidental y Extremadura) se supera ya esa cifra. Y esto sin olvidar que estas cantidades constituyen en sí mínimos que habría que completar”* (ESPINOSA, 2006:172).

Unas cifras que, a pesar de no mostrar datos completos, si reflejan una violencia cuyos principales protagonistas, independientemente del bando que las llevase a cabo, fue la población civil que sufrió persecuciones, asesinatos o depuraciones. *“Fueron sobre todo civiles los que soportaron bombardeos sobre pueblos y ciudades, fue su sangre la que regó las tapias de los cementerios y las cunetas de los caminos y fueron sus huesos los que mayoritariamente llenaron las fosas comunes (...)”* (RODRIGO, 2008:33).

La extensión de la crueldad en las zonas donde fracasó la sublevación fue casi inmediata. Una violencia que “*se identificó primero con el atajamiento del golpe de Estado (las ocupaciones de los centros de la sublevación como los cuarteles de las Atarazanas en Barcelona y de la Montaña en Madrid y, al cabo, el asesinato de buena parte de los sitiados) y, tras la declaración de la huelga general, con la apertura de la espita revolucionaria, consecuencia de la virtual ausencia operativa de los órganos coercitivos del Estado (...)*” (RODRIGO, 2008:35). Una vehemencia que pasó de ser defensiva a ser agresiva y que arrastró a la muerte a miles de personas. Uno de los estamentos sociales considerados como un objetivo primordial fue la Iglesia. Una crueldad que ante la opinión pública mundial se presentaba “*como reedición de la guerra de los Treinta Años o de las persecuciones religiosas de la época medieval (...)*” (BEEVOR, 2005:124). Atrocidades caracterizadas por torturas contra el clero, el incendio de iglesias y conventos, la quema de imágenes y objetos de culto religioso así como la quema de “*documentos municipales, judiciales, notariales, eclesiásticos y registros de la propiedad que habían podido conseguir*” (BEEVOR, 2005:126).

Los extranjeros no podían entender las acciones brutales contra la Iglesia. Sin embargo, éstos no conocían el poderoso papel político desempeñado hasta entonces por la Iglesia de España, “*corazón de las fuerzas más conservadoras del país y baluarte de lo que la derecha definía como civilización española*” (BEEVOR, 2005:125). Una Iglesia que definió la guerra como una cruzada. En palabras de Monseñor Enrique Pla y Deniel, obispo de Salamanca, “*(...) el alzamiento español no es una guerra civil, sino que es sustancialmente una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización contra el comunismo (...)*” (citado en REIG, 1990:42). Bajo esta premisa la guerra civil devino “*una guerra de principios, de doctrinas, de un concepto de la vida y del hecho social contra otro, de una civilización contra otra (...)* una cruzada, una obra de redención, y la sangre derramada era como sangre de mártires, el tributo necesario para hallar el camino de la resurrección” (JULIÀ, 1999:22). Sin embargo, para los anarquistas “*la Iglesia venía a ser algo así como el ejecutor de la represión psicológica del Estado, la cómplice de ricos y poderosos que prometía a los pobres que algún día, si se portaban bien, heredarían la tierra*” (BEEVOR, 2005:125). Una atrocidad que dejó cifras tan sobrecogedoras como la muerte de 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 monjas. Unas cifras muy inferiores a los asesinatos de izquierdistas que la derecha llevaba a cabo en nombre de Dios (BEEVOR, 2005:125).

Asimismo, en el bando sublevado se actuó con la idea de que *“cuánto más dura y cruel fuese la represión (...) más fácil sería lograr los objetivos de derribar la República y destruir de raíz las bases sociales del sindicalismo y de los partidos de izquierda”* (CASANOVA, 2004: IX). Bajo este objetivo, *“los militares hicieron probar el hierro de su espada a decenas de miles de ciudadanos. Así, por ejemplo, en Badajoz, las victoriosas tropas moras, después de haber sufrido muchas bajas infligidas por la milicia republicana, amontonaron a todos los sospechosos de resistencia en la plaza de toros y los mataron a tiros de ametralladora”* (HERR, 2004:255). Un plan que perseguía una sublevación rápida con toda la violencia que fuera necesaria. Así lo dejó patente el general Emilio Mola, en su primera Instrucción reservada a los conspiradores, firmada el 25 de mayo de 1936, donde decía que *“la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado”* (REIG TAPIA, 1990:107).

Un terror infligido que fue definido como una herramienta ejemplarizante cuyo mejor ejemplo tal vez sea esa inscripción de *“garrote y prensa”*, firma utilizada por el propio caudillo cuando firmaba una pena de muerte y que, *“vinculaba el terror (el garrote) a su función instructiva (la prensa, su publicidad que extendía y amplificaba ese terror en la población)”* (RODRIGO, 2008: 15). Nadie conocía mejor que ellos lo útil que podía ser el terror para paralizar las posibles resistencias y eliminar a sus oponentes. Sembraron el miedo desde el primer día, matando, aplastando las resistencias, considerando rebeldes a todo aquel que defendía la República. Una represión que se cebó no sólo con las clases obreras y campesinas, con afiliados a las organizaciones sindicales y los partidos políticos sino también con sus viudas, hijas o hermanas que eran castigadas rapándoles el pelo al cero, la purga, la marcha por las calles del pueblo o la expropiación de sus bienes.

Una España sumida en un terror incontrolado donde *“la obediencia a la ley fue sustituida por el lenguaje y la dialéctica de las armas, por el desprecio a los derechos humanos y el culto a la violencia (...)”* (CASANOVA, 2007:200). Un nuevo escenario de guerra total donde para matar sin remordimientos sólo bastaba señalar que el enemigo no era un ser humano. Una auténtica escabechina que dejaba a ciudadanos allí donde caían abatidos, en las cunetas de las carreteras, en las tapias de los cementerios, en los ríos, en pozos y minas abandonadas. Unas tumbas silenciosas que reflejan una violencia no como un medio para conseguir la victoria sino como un instrumento para

aniquilar al enemigo. Una violencia como medio *“para acabar con el mal de España, arrancar sus raíces, para que jamás volviera a brotar la semilla del republicanismo, del socialismo, del laicismo”* (RODRIGO, 2008:63). Un terror franquista que fue, según Michael Richards, *“programado, pensado e intencionado”* (RODRIGO, 2008:63). Un terror blanco que, según Anthony F. Upton *“tuvo tres componentes: las represalias extralegales emprendidas contra los vencidos, la represión legal llevada a cabo bajo el amparo de la ley, y el sufrimiento y la mortalidad experimentados por los prisioneros rojos”* (citado en CASANOVA, 2001:19).

Pero no sólo la violencia implica la muerte o los asesinatos, durante la guerra civil hubo muchos espacios relacionados con el terror, con el castigo, como la plaza de toros de Badajoz, el puerto de Alicante, Madrid, Paracuellos del Jarama o Torrejón de Ardoz. Pero no fueron los únicos. Un ejemplo de ello fue la creación de los denominados campos de concentración situados en Miranda de Ebro, Albaterra o Lerma, entre otros. Utilizando las palabras de Javier Rodrigo, hubo en España unos 180 campos donde a los prisioneros de guerra *“se les internaba, reeducaba, torturaba, aniquilaba ideológicamente y preparaba para formar parte de la enorme legión de esclavos que construyeron y reconstruyeron infraestructuras estatales, como parte de un castigo que debían pagar a la “verdadera” España”* (RODRIGO, 2004:111-112). Campos que supusieron un primer eslabón en la cadena depurativa y represiva no sólo en el sentido militar sino también a nivel funcional y económico- con la formación de escuadras de trabajadores forzosos- , moral e ideológico y social - imposición de condiciones de vida inhumanas, represión física y asesinatos-(RODRIGO, 2004: 113). Los internados en estos lugares eran considerados antiespañoles, escoria comunista, y se les negaba la condición de personas. Así, por ejemplo, un superviviente del campo de concentración de Albaterra declaró en Granada TV en 1983 que no se les consideraba seres humanos sino cosas. Así lo dejaba patente, en ese programa, las palabras de Isidro Castrillón López, director de la cárcel Modelo de Barcelona que hablaba así de los presos: *“Hablo a la población reclusa: tenéis que saber que un preso es la diezmillonésima parte de una mierda”* (JULIÀ, 1999:278).

Con la victoria de los sublevados no llegó la paz sino una *época de pacificación*, es decir, una paz que no fue para todo el mundo, sino para los vencedores y sus adeptos. Muchos de los vencidos que se creyeron a salvo bajo las promesas de que no tenían nada que temer quienes estuviesen libres de delitos de sangre, se enfrentaron a la

realidad. Se les negó el derecho a reconstruir sus vidas y se les condenó a la humillación y la marginación. Una violencia franquista que, en palabras de Javier Rodrigo, no puede desligarse de la realizada durante la confrontación bélica por varios motivos, entre ellos, porque *“la gran mayoría de juicios, arrestos, encarcelamientos, sometimientos a trabajos forzosos y, por supuesto, los fusilamientos estuvieron relacionados en posguerra con causas derivadas de la guerra, y no tanto con delitos posteriores al 1 de abril de 1939”* (RODRIGO, 2008:48).

En definitiva, la violencia ha tenido un protagonismo importante en el desarrollo de los acontecimientos. La deshumanización del contrario y la barbarie que generó han pasado a la historia. Una realidad que ha sido silenciada y olvidada a favor de una transición democrática y de una amnistía general. Un silencio que, a partir de la exhumación de las fosas comunes, de las políticas de memoria o la formación de asociaciones, han permitido que salgan a la luz las historias del pasado adquiriendo un protagonismo creciente, sobre todo para aquellos que no han olvidado, para aquellos que han decidido alzar la voz. Unas fosas comunes, sembradas de cadáveres en las retaguardias nacionales donde, como escribiría el dibujante gallego Castelao, *“no se enterraban cadáveres, sino que se enterraban semillas”* (RODRIGO, 2008:64). En definitiva, unas fosas comunes que representan físicamente una “limpieza” atroz cuyos principales protagonistas fueron los civiles, *“un espacio físico preferencial de ese modelo de violencia muchas veces cavada por los propios finados (...)”* (RODRIGO, 2008:38).

3. ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO: LAS FOSAS COMUNES.

El legado dejado por las guerras y los conflictos violentos abarca desde la destrucción de infraestructuras a la instauración de regímenes de terror y la aparición de generaciones traumatizadas “*sostenidas en las desapariciones, en las represalias, en la interrupción o imposibilidad del duelo, en la experiencia de huérfanos, exiliados o mutilados, o en la creación e imposición de versiones oficiales de los acontecimientos históricos que silencian sus voces, las voces de las llamadas víctimas*” (FERRÁNDIZ, 2007:4). Pero bajo estas *verdades oficiales*, bajo los monumentos y los actos conmemorativos, bajo la coerción, el silencio y el olvido, quedan para el futuro evidencias de la barbarie sufrida: las fosas comunes. Emilio Silva afirma que la exhumación de los cuerpos enterrados en ellas, “*son testigos indelebles y dramáticos de la inacabable brutalidad humana*” (SILVA, 2003:56). Testigos de los agravios de la memoria y de la historia e instrumentos que nos permite comprender los efectos sociales, políticos y culturales suscitados por el terror y el miedo. Utilizando las palabras de Francisco Ferrándiz, “*excavar las fosas significa, literalmente, excavar la memoria*” (FERRÁNDIZ, 2007:5).

En este sentido, las fosas comunes representan una forma de violencia masiva donde las resistencias eran atajadas brutalmente con el objetivo prioritario de destruir todo rescoldo de la República, de aniquilar físicamente a aquellos que se habían opuesto a la *Nueva España*. Ese era su destino, el destino que les esperaba a las voces incómodas, a los afectos a la República e incluso a soldados y curas que no se habían unido a la sublevación. Ese fue el caso de 16 sacerdotes vascos que, acusados de nacionalistas radicales, fueron asesinados por los sublevados (BEEVOR, 2005:119). En definitiva, miles de personas cayeron asesinadas sin juicio, sin posibilidad de defenderse y, muchas veces sin tan siquiera saber por qué eran sacadas de sus casas, subidas a un camión y fusiladas. Motivos laborales, políticos e incluso rencillas personales fueron motivos más que suficientes para llevar a la fosa común a jóvenes y a viejos, a mujeres y niños. Así, por ejemplo, en la zona de Candeleda (Ávila) fueron asesinadas de madrugada tres mujeres y sus cuerpos abandonados en la cuneta de la carretera (RODRIGO, 2008:73). Con su asesinato nadie en el pueblo se atrevería a abanderar nunca más ideas contrarias al régimen, “*nada como la pedagogía de la sangre para paralizar las resistencias*” (RODRIGO, 2008:73). Un contexto de oprobio y sangre que no distinguía

entre inocentes o culpables, menores de edad, ancianos, hombres o mujeres. Un contexto donde *“los alborotadores desaparecieron tras la Guerra Civil de la superficie de la tierra, porque encontraron su lugar varios metros por debajo de ella.”* (RODRIGO, 2008:75). Una imagen dramática, como si de un cuadro se tratase, donde el elemento importante eran los centenares de fosas comunes esparcidas por la geografía española.

Pero, ¿qué es una fosa común? Según la Real Academia Española de la Lengua, una fosa común es un lugar donde se entierran los restos humanos exhumados de sepulturas temporales o los muertos que, por cualquier razón, no pueden enterrarse en una sepultura propia. Una muerte que forma parte de la cotidianeidad de la vida, el final para todos independientemente del nivel económico, social o cultural. Ahora bien, a pesar de ser una constante en la vida, no lo ha sido las circunstancias de la misma así como su entierro posterior. Una de las circunstancias de muerte, de las muchas que se podrían mencionar, es la guerra y *“hablar de la muerte en la guerra, es hablar de cadáveres y de cómo se afronta su inhumación”* (SOLE, 2008:184-185).

En el caso español, Francisco Espinosa hace hincapié en un importante problema que trajo consigo ocultar tanto crimen: los cadáveres. Numerosas complicaciones siendo, la primera de ellas, llevar a cabo el asesinato sin dejar rastro alguno. *“Esto obligó a los represores a realizar prácticas poco ortodoxas con el objetivo principal de que nada trascendiera”* (ESPINOSA, 2010:96). Una práctica habitual fue ocultar los cadáveres en fosas comunes dispersas por todo el territorio. Un ejemplo de ello fue el asesinato de Francisco Prieto que cayó acribillado en el cortijo de la Alcaldía y su cadáver fue llevado al cementerio de Los Corrales (ESPINOSA, 2010:96). Pero esta práctica no fue la única. El traslado de un pueblo a otro de los que iban a ser asesinados con el objetivo de confundir a los familiares o el intercambio de las tareas represivas entre las milicias para evitar una posible identificación de los verdugos fueron algunas de ellas. En definitiva una ocultación que perseguía por un lado, que los familiares desconociesen el lugar donde habían sido asesinados y enterrados y, por otro, el anonimato de los piquetes de la muerte que no querían actuar en sus pueblos ya que podían correr el riesgo de tener que fusilar vecinos e incluso parientes. Una ocultación que refleja la idea de Francisco Ferrándiz cuando define las fosas comunes como *“un tipo de inhumación que se orientaba al silencio y la desorientación de las memorias no oficiales de la violencia así como a la consolidación de regímenes de opresión y miedo”*

(FERRÁNDIZ, 2007:4). Una “*sofisticada tecnología de producción de terror, con efectos a corto, medio y, como veremos actualmente, largo plazo*” (FERRÁNDIZ, 2011:669). En definitiva, unas tumbas que derivadas de conflictos y guerras tenían la finalidad no sólo anular física y políticamente al adversario sino desestructurar a las familias, extender el miedo y la sospecha, interrumpir el duelo y oscurecer así las evidencias de la represión. Una representación directa del rechazo hacía aquellas voces incómodas, un tipo de inhumación “*carente de toda ornamentación y de toda afirmación de individualidad, un espacio sin recuerdos y lleno de olvidos (...)*” (SOLÉ, 2008: 27). Se trata de acciones complejas y perturbadoras donde subyace el deseo de los familiares de abrirlas y exhumar los restos óseos para dignificar su muerte, darles la sepultura de quien perdió la vida fuera por el motivo que fuera. Un tipo de inhumación que ha forzado al país a enfrentarse a una modalidad de víctimas cuyos cuerpos amontonados sin identificar en tumbas sin señalar les confería a las personas fusiladas lo que Francisco Ferrándiz ha definido como *cuasi desaparecidos* (FERRÁNDIZ, 2011:669). Un amontonamiento deliberado de cuerpos que suscitan rumores sobre quiénes pueden estar allí y “*sobre ciertos detalles del acto de violencia que origina la fosa*” (FERRÁNDIZ, 2011:669). Una ambigüedad en torno a la desaparición masiva de personas que provoca estados de ansiedad y discordia en la sociedad (FERRÁNDIZ, 2011:669).

A medida que van evolucionando los condicionantes sociales, históricos y políticos, las fosas comunes pasan de ser instrumentos del terror a convertirse en molestas pruebas de la barbarie. Por ello, parece indudable que el impacto mediático que han suscitado estas exhumaciones, no sólo por la aparición de esqueletos y cráneos acribillados y amontonados en las cunetas y descampados sino por los testimonios de familiares de las víctimas así como el análisis de diversos tipos de expertos, han dejado patente el falso cierre de una memoria, el intento de olvido de los aspectos sucios de una represión sobre todo en sus años más negros. Una geografía marcada por el terror y caracterizada por asesinatos, fusilamientos masivos y masacres que habían permanecido silenciadas, sobre todo, para el gran público y, especialmente, para las generaciones que no vivieron la guerra y apenas escudriñaron la posguerra y la transición a la democracia (FERRÁNDIZ, 2011:10). En este sentido son importantes los informes arqueológicos y forenses debido a su capacidad para reconstruir y describir hasta los pequeños detalles de un horror, de una barbarie que asoló toda la geografía española. Evidencias que a

pesar de ser silenciadas largo tiempo siguen siendo una realidad. Por tanto, decir que las exhumaciones son reabrir viejas heridas, sería como creer que realmente cicatrizaron. Así lo evidencian las personas que se derrumban ante las fosas con el deseo de que algunos de esos individuos desconocidos sea su familiar, su ser querido. Sus recuerdos vuelven a salir, su dolor vuelve a ser tan intenso como la primera vez, sus preguntas siguen sin respuesta. Utilizando las palabras de Joan Santacana i Mestre, *“el ser humano es, sobre todo, memoria (...) Y, una memoria, no puede ser destruida, porque sin ella no hay humanidad”* (citado en SALLES, 2007:9). Así su incidencia no sólo ha implicado la recuperación de los cuerpos de padres, tíos o hermanos sino que también, *“ha significado tender un puente desde el silencio impuesto a las familias aún en buena parte de la democracia, hacia la escucha y comprensión de una sociedad marcada, hasta no hace mucho tiempo, por una mezcla de amnesia consensuada, indiferencia acomodada e, incluso, olvido consentido”* (MONTERO, 2009:292).

Con ello, ha surgido un creciente interés, a lo largo de la última década, en materia de la recuperación de los restos óseos de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Un proceso exhumatorio que no es nuevo en España. En los albores del régimen franquista, uno de los elementos políticos, culturales y psicológicos usados con más exceso fue una política de la memoria relativa *“a la exaltación, omnipresencia e invasión de los espacios públicos de los muertos”* (RODRIGO, 2004:200). De hecho *“más que un simple culto a los caídos se trató de una aterradora cultura de la muerte”* (RODRIGO, 2004:200). Sus fotografías y los nombres de los asesinados, ejecutados por el *terror rojo* invadieron las portadas de periódicos y pasquines, y sus recuerdos se invocaban en cualquier acto público. Un ejemplo de ello es la Orden del 6 de mayo de 1939 que disponía que todo aquel que deseara exhumar el cadáver de alguno de sus familiares asesinados por los rojos, para ser inhumado en el cementerio, podían solicitarlo dentro de un plazo de seis meses sin que tuviera que abonar derechos sanitarios de ninguna clase. Por lo tanto, desde los primeros momentos de la dictadura franquista hubo la conciencia de la existencia de miles de cuerpos que yacían en fosas comunes y que fueron *“(...) en buena parte investigados en la Causa General, desenterrados, identificados y reubicados en lugares de enterramiento más dignos; sus nombres fueron inscritos en placas e incorporados a los ciclos conmemorativos propios del discurso franquista dominante de la Victoria”* (EXTEBERRÍA, 2012:671). Una política de memoria bajo el grito de *“Caídos por España, presente”*, escuchado repetidamente en

boca del ministro del Interior Ramón Serrano Suñer, que era como una seña de identidad de aquellos que habían caído en nombre de la patria. Así, en Torrejón de Ardoz se procedió a la exhumación de cientos de cadáveres procedentes de diferentes fosas comunes; se fijaron lugares para la memoria y el culto a los caídos como el decreto, en 1938, que establecía como día de luto la fecha del 20 de noviembre así como el establecimiento de los nombres de los caídos en iglesias y parroquias. Pero, la construcción más sólida de esta memoria fue la construcción del mausoleo de Cuelgamuros, conocido como el Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1959, para perpetuar la memoria de aquellos que lucharon en *“nuestra gloriosa cruzada”* (RODRIGO, 2004:202). Como ha señalado Paloma Aguilar *“el régimen siempre hizo ostentación de su victoria y siempre mantuvo un discurso oficial sobre la guerra valiéndose de la construcción de lugares de la memoria colectiva, de medidas coactivas o de disposiciones sobre contenidos de la enseñanza”* (citado en JULIÀ, 1999:37).

Pero cabría preguntarse si esta memoria y dignificación de los caídos por España, tenía su paralelismo en los caídos del bando vencido. La respuesta es negativa como demuestra la multitud de fosas comunes que, en la actualidad, no han sido exhumadas, víctimas que aún no han sido reconocidas, asesinados sin inhumar dignamente. Esto hace patente esa memoria fragmentada y dividida de la guerra civil y la dictadura franquista donde entre los derrotados de la guerra no se hablaba de la represión sufrida por sus parientes cercanos, no se decía nada. Así lo refleja un corresponsal del *Times* que aseguraba que los españoles debían leer a los británicos para saber lo que sucedió en España porque, *“se vivía atenazados por el tabú de la guerra civil”* (JULIÀ, 1999:48).

Con la llegada de la Democracia a partir de 1978, *“se pusieron en marcha numerosas exhumaciones que lamentablemente no contaron con apoyo técnico ni institucional en lugares como Navarra, Soria, La Rioja, Palencia y, en general, en todo el Estado. De esta etapa apenas existe información que permita conocer el alcance y los resultados de las exhumaciones”* (ETXEBERRÍA, 2012:13). Así, por ejemplo, en pueblos como Alfaro o Calahorra se llevaron a cabo exhumaciones de decenas de cuerpos e incluso se llegaron a convocar manifestaciones exigiendo justicia. Unas manifestaciones que reclamaban algún tipo de responsabilidad a aquellas personas que habían colaborado en las ejecuciones (SILVA, 2003: 122). Pero entonces algo cambió. El 23 de febrero de 1981 el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Congreso de los Diputados. Esto

provocó la interrupción de las exhumaciones, al menos de forma pública. Muchas de las personas que entonces exhumaron los restos de sus familiares, años después, mantienen el silencio sobre aquella experiencia. Volvió el recuerdo del miedo; *“un miedo que aún hoy es fácil de encontrar, sobre todo en los pueblos pequeños en los que los pistoleros han seguido haciendo una vida normal en democracia, sin que nadie se haya atrevido ni a señalarlos públicamente”* (SILVA, 2003:122-123).

Una situación que hace evidente que la exhumación de las víctimas que sufrieron la barbarie es siempre y por fuerza un asunto controvertido. En ese sentido, *“el posicionamiento de los diversos agentes sociales y políticos a los que se atribuye o reclaman competencia sobre ello es cambiante”* (FERRÁNDIZ, 2011:670). El Estado pueden optar por participar en mayor o menor medida en el proceso, o bien, pueden tratar de impedirlo, entorpecerlo e incluso congelarlo. De ahí que, en muchas ocasiones, deban hacerlo entidades no gubernamentales tanto de ámbito nacional como internacional, o colectivos de familiares, como ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica), la Sociedad de Ciencias Aranzadi o la asociación Foro por la memoria, entre otros.

De todas formas, no será hasta principios del siglo XXI, cuando se lleve a cabo un proceso de excavación y documentación sistemática así como la difusión de la información de las fosas que contienen *“los restos de multitud de personas ejecutadas por el bando franquista durante la guerra o bajo la dictadura militar”* (FERRÁNDIZ, 2011:672). Como es bien sabido, la exhumación de las fosas comunes se viene realizando con metodología científica a raíz de que en el año 2000, se llevase a cabo la primera actuación de estas características en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo. Esta iniciativa fue impulsada por el periodista y licenciado en sociología Emilio Silva Barrera, que, más tarde, fundaría junto a Santiago Macías, la conocida como Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Una asociación que ha continuado abriendo fosas como las de Fresnedo (León, 2001) o Piedrafita de Babia (León, 2002), entre otras. En total se recuperaron los restos esqueléticos de 13 hombres, víctimas todos ellos de la represión franquista desatada a comienzos del levantamiento militar de 1936, durante lo que se viene denominando periodo del *“terror caliente”*. Su impacto mediático fue notable. De hecho, reflejaba *“la necesidad de responder a la demanda social que constituía la ansiada y pospuesta recuperación de los cuerpos de las víctimas de la Guerra Civil”* (MONTERO, 2009:290). En palabras de Ermengol

Garriot, “(...) *la excavación arqueológica y posterior estudio antropológico de la fosa común de Priaranza del Bierzo (León), en el año 2000, puso los muertos de la Guerra Civil española de nuevo sobre la mesa*” (GARRIOT, 2008:120).

Sin embargo, la ARMH, no ha sido la única. Otra de las asociaciones que ha contribuido al proceso exhumatorio ha sido el Foro por la Memoria, vinculado al PCE y presidida durante años por J.M. Pedreño, que cuenta entre sus exhumaciones con las de Otero de los Herreros (Segovia, 2003), Bercial del Zapardiel (Ávila, 2003), Santaella (Córdoba, 2004), Sepúlveda (Segovia, 2004) y Turanzas (Asturias, 2006). O, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, comisionada por el Gobierno Vasco, que ha constituido un Grupo de Trabajo coordinado por el antropólogo forense Francisco Exteberría (UPV) “*para llevar a cabo un programa de recuperación de la memoria histórica en Euskadi, que incluye tanto la localización e investigación de fosas, como exhumaciones, como la recogida de testimonios de represaliados y víctimas del franquismo. Entre las exhumaciones promovidas por Aranzadi están la sima de Kurtzetxiki (Arrasate, 2002), y las fosas de Zaldibia (2002) y Elgeta (2004)*” (FERRÁNDIZ, 2007:7-8).

En definitiva, la aportación de un nieto, el caso de Emilio Silva, es “*no haberse conformado con saber que su abuelo fue asesinado en Priaranza del Bierzo sino decidirse a exhumarlo de la cuneta donde lo metieron y darle sepultura.*” (ESPINOSA, 2010:65). Un reflejo del conocimiento que se tenía durante los años ochenta y noventa de la existencia de las fosas comunes y de las exhumaciones realizadas a finales de los años setenta pero que, en aquellos momentos, aún era patente el temor que generaba hablar de esos temas. A esto se le añadía la actitud del PSOE que mantenía un tabú en torno a la represión. Esto trajo como consecuencias que, a partir de 1976, no se hablará públicamente de la cuestión “*permitiendo así que no fuera la generación de los maridos y esposas o la de los hijos las que pusiesen fin al pasado oculto recuperando los restos de sus familiares y teniendo la posibilidad de exteriorizar sus sentimientos*” (ESPINOSA, 2010:65).

Un tabú que ha suscitado la aparición de la llamada “*la generación de los nietos*” como los precursores e incitadores de los procesos de exhumación. En este caso, “*(...) el hecho de que muchos de los que han dado la vida al movimiento pro de la memoria y muy especialmente a la exhumación de fosas sean nietos o biznietos de las víctimas del fascismo español, lo que viene a significar gente joven que no vivió la dictadura, no*

equivale en modo alguno a que en torno a dichas actividades y desde diferentes ámbitos no hayan participado personas que nacieron en los años cuarenta, cincuenta y sesenta, o sea, que ni todos los “nietos” tienen ahora cuarenta años ni todos los interesados por estas cuestiones son “nietos”(ESPINOSA, 2010:64). Una teoría, la del protagonismo de los nietos, que Francisco Espinosa afirma que cumpliendo una función tranquilizadora intenta despachar una cuestión compleja debido a que *“por un lado, su edad e ignorancia acerca de lo que fue la dictadura y la transición explican semejante salida de tono, y por otro, tranquilizando a quienes piensan que nosotros no hicimos nada en tal sentido porque no se podía, no convenía y además no nos correspondía”* (ESPINOSA, 2010:64). En definitiva, *“aparte de los “nietos”, también están los historiadores y, antes que ellos, están aquellos que, por marginados que quedarán, advirtieron en su momento que las cosas se estaban haciendo mal y que no podía borrarse el pasado sin comprometer presente y futuro”* (ESPINOSA, 2010:65). Una imagen donde parece que no tenga razón Paloma Aguilar cuando dice que *“las partes más espinosas del pasado sólo han podido ser abordadas con el advenimiento de una nueva generación libre de miedos y de sentimientos de culpa”*; ni Javier Rodrigo al escribir que la *“generación de los nietos de la Guerra Civil, despojada de los “lastres” de ese pasado, propone resituar esos paradigmas de la democratización (...)”* (citado en ESPINOSA, 2010:65). Una expresión que parece hacer hincapié a que sólo éstos han podido llevar a cabo un movimiento de esta magnitud justificado porque no fueron víctimas del contexto. Un mensaje tranquilizador a aquellos que no han aportado nada pensando que no se podía hacer. En este sentido, cabría preguntarse si realmente no se podía o no se quería. Tal vez era demasiado el miedo, demasiado el terror para oponerse. La política de represión les había hecho mella y, simplemente, se adaptaron. Lo que sí es cierto es que así como una parte de la sociedad se resistió a aceptar los valores propugnados por el régimen, otros suscribieron buena parte de los contenidos del discurso franquista. Una realidad que, aún hoy, es evidente.

A pesar de las posibles deficiencias en torno a las actividades de investigación del legado de la guerra civil y el franquismo, las exhumaciones están resultando decisivas para vislumbrar la cruda violencia de la retaguardia. Asimismo, potencian un debate mucho más amplio del estrictamente académico sobre el alcance y la magnitud de la represión y sus consecuencias a corto y largo plazo. *“En los últimos años, las fosas comunes de la derrota han pasado de ser vertederos políticos y emocionales a*

convertirse en desconcertantes campos minados, objeto de exposición y debate público. En este sentido, sin embargo, se requiere un análisis más amplio y a largo plazo para comprender la naturaleza del tipo de acción social, simbólica y política en que se están convirtiendo las exhumaciones en la España contemporánea y para saber por cuánto tiempo serán todavía un asunto candente en los debates sobre la memoria de la Guerra Civil” (FERRÁNDIZ, 2011:674-675). Una investigación que ha contribuido no sólo a divulgar los datos concretos de la represión a partir de los informes forenses y arqueológicos, sino que “(...) van configurando un contexto emergente para los relatos de la derrota a una escala inédita en la España contemporánea. Dan lugar a muchas clases diferentes de discursos y prácticas públicas, desde la información in situ que proporcionan los arqueólogos, forenses y otros especialistas que se encuentren en el terreno, hasta los gestos, en ocasiones efímeros aunque emocionalmente demoledores, de los familiares y otras personas que acuden a las exhumaciones” (FERRÁNDIZ, 2011:675).

Desde que comenzaron a exhumarse de forma más generalizada, el proceso ha ido adquiriendo “(...) unos contornos más reconocibles y homogéneos, a lo que sin duda a contribuido la creación por algunas de las asociaciones impulsoras de las exhumaciones de equipos más o menos estables de expertos, así como la elaboración de protocolos técnicos destinados a normalizar los procedimientos de excavación e identificación” (FERRÁNDIZ, 2011:672). Un proceso que necesita de las aportaciones de las diferentes ciencias, cada uno en sus medios y ámbitos de actuación. En este sentido, Juan Montero considera que este periodo de la historia reciente nos ha legado un patrimonio que debe ser estudiado desde las diversas disciplinas posibilitando así un conocimiento del mismo (MONTERO, 2009:296). “*En este caso, cabría preguntarse si los espacios y vestigios que han generado la Guerra Civil y el Franquismo son bienes patrimoniales desde la óptica arqueológica. Si fuera así, constituiría una actividad arqueológica todo lo relativo a la documentación e investigación de los bienes ubicados, aunque sea parcialmente, en el subsuelo.*” (MONTERO, 2009:296). Un conjunto de escenarios que forman parte del contexto bélico como los campos de batalla, las trincheras, los búnkeres, refugios, cuarteles, prisiones, campos de concentración, buques de guerra, etc. En este sentido habría que hacer mención a las excavaciones llevadas a cabo en el frente de Guadalajara, concretamente en una trinchera franquista en el pueblo de Abánades (Guadalajara), que estuvo en uso entre

marzo de 1937 y el final de la guerra. El refugio de Torrejón de Velasco, una estructura subterránea que correspondería a un refugio de tropas y material bélico, o el refugio antiaéreo del puente de Vallecas, las trincheras y búnkeres de la Dehesa de Navalcarbón (El Pardo), entre otros escenarios. Unas excavaciones que han proporcionado rastros importantes como munición, equipamientos y otros materiales.

Esto hace evidente que las actividades arqueológicas no tienen porque asimilarse exclusivamente a las tareas exhumatorias, sino que también se deben aplicar a la intervención en todas aquellas estructuras asociadas al conflicto bélico. Unas tareas que precisan por lo tanto de la metodología y las técnicas arqueológicas. Juan Montero hacía referencia a una problemática constante: la precariedad en la labor de difusión de los resultados. Una deficiencia que contribuye a crear un vacío de conocimiento importante. Está claro que *“la arqueología contribuye al estudio de la Guerra Civil española, fundamentalmente, a través de la excavación de sus registros, al tiempo que ayuda en las tareas de la llamada recuperación de la memoria histórica y, sobre todo, a los familiares de las víctimas de la represión franquista con las exhumaciones de fosas comunes. Sin embargo, es inevitable plantearse qué ofrece la investigación de estas dos vertientes para los arqueólogos”* (MONTERO, 2009:296-297). En este sentido, son evidentes las limitaciones que el registro arqueológico impone a los investigadores *“(...) toda vez que el propio proceso de recuperación de las evidencias empíricas y su detallado análisis no permite, evidentemente, ir más allá de la mera identificación del dato arqueológico”*. (MONTERO, 2009:298).

Una de las características de la Arqueología es su indefinición temporal. Esto permite al arqueólogo desarrollar su labor en cualquier contexto independientemente del marco cronológico. Tradicionalmente se ha considerado la Arqueología como una herramienta, a la par que una disciplina auxiliar de la Historia, que *“(...) reducía su papel a la descripción y clasificación de los restos materiales, en detrimento de las inferencias sociales, políticas y económicas que eran cometido por los historiadores”* (MONTERO, 2009:298). Pero, en la actualidad, se admite que el método arqueológico no se trata de una técnica o procedimiento instrumental sino de una disciplina científica. De ahí que, recientemente, dentro de los nuevos campos de investigación arqueológica nos encontremos la Arqueología de la Guerra Civil o Arqueología del Pasado Reciente (MONTERO, 2009:298). Un debate dentro del propio sector profesional que evidencia discrepancias sobre la contribución de la Arqueología en las etapas más recientes.

Mientras unos han considerado su nula o escasa contribución debido a que el legado tanto escrito como visual es suficientemente amplio y extenso, otros consideran que la Arqueología se limita a las etapas cronológicas de la Antigüedad, sobre todo aquellas que no presentan escritura o que la documentación es escasa. Un debate abierto pero con evidentes signos de cambio debido a la colaboración de la Arqueología en las tareas exhumadoras así como en la difusión de los resultados pero siempre *“dentro del compromiso que han adquirido con el estudio de las víctimas de la represión franquista desde la perspectiva, evidentemente, arqueológica”* (MONTERO, 2009:298-299). En palabras de Emilio Silva, *“(…) los trabajos de exhumación me enseñaron lo importante que es la utilización de los métodos arqueológicos en la apertura de fosas (...)”* (SILVA, 2003:59).

Pero no sólo la Arqueología contribuye a este complejo proceso de exhumación. La Antropología Forense, en palabras de Fernando Serulla Rech, *“(…) es una forma más de contribuir a la reconstrucción de la historia de nuestro país, una forma más de colaborar en una causa humanitaria y una enorme fuente de conocimiento”* (citado en ETXEBERRIA, 2012:13). En este sentido, aunque la exhumación de “los trece de Priaranza”, en el año 2000, fue una fosa exhumada por un amplio equipo de expertos, no sólo desde el punto de vista arqueológico sino forense, y que permitió, entre otras cosas, la identificación por ADN de uno de los cadáveres, no fue la primera víctima en ser identificada por este método. En 1999 se llevo a cabo la investigación sobre el caso de Manuel Irurita Almandoz, Obispo de Barcelona, y que se creía que fue fusilado en 1939 e inhumado en la catedral de Barcelona. Digo que se creía porque algunos investigadores ponen en entredicho su asesinato ante la tapia del cementerio de Montcada (CLARA, 2008).

En definitiva, la existencia de una voluntad exhumatoria que pretende demostrar *“mediante estudios antropológicos y paleopatológicos, las causas de las muertes y la violencia que las víctimas sufrieron (...)”* (SOLÉ, 2008:29). Restos antropológicos *“(…) que no hacen sino probar la represión ejercida, esto es, el asesinato de miles de personas que, hasta la fecha, figuraban como oficialmente “desaparecidas” dado que no existía certificado de defunción al no existir cuerpo probatorio del fallecimiento”* (MONTERO, 2009:292). Para ello, es importante el papel de los informes técnicos que se han llevado a cabo en las disciplinas que integran la investigación. Informes que, a pesar de que presenten resultados desiguales, existe una mejora en su elaboración así

como en sus anexos complementarios gráficos y documentales siguiendo las pautas y el estilo de los informes técnicos periciales (ETXEBERRÍA, 2012:14). Utilizando las palabras de Emilio Silva, *“El concurso de ambas disciplinas – Arqueología y Antropología- permitirá recuperar en las mejores condiciones posibles los cuerpos y objetos asociados, proporcionando, en el curso de la excavación, un primer recuento individual, para, posteriormente, en el laboratorio, intentar su identificación más precisa, “nominal”, gracias a los datos que las familias puedan aportar: edad, rasgos físicos, patologías que hubieran podido sufrir, etc.”*(SILVA, 2003:57-58).

A la Arqueología y la Antropología forense se debe sumar la labor histórica de las exhumaciones. Un estudio histórico que ha tenido que hacer frente a importantes dificultades para obtener toda la información posible. Las aportaciones de los testimonios directos así como de sus familiares han ayudado a localizar los restos, han aportado información relevante sobre la situación vivida así como las evidencias de una barbarie brutal de la que aún hoy, no se tiene cifras exactas ni información completa. Pero tiene una problemática importante, muchos de los testimonios se han perdido debido al fallecimiento de estos. De ahí, que la recopilación de testimonios de los testigos y familiares de las personas represaliadas y fusiladas se haya convertido en uno de los objetivos primordiales. Unos relatos que Francisco Ferrándiz atribuye un doble efecto curativo en el que, por un lado, pone fin a un periodo marcado por la humillación, el miedo y el olvido y, por otro lado, la incorporación al discurso público dando pie a su reconocimiento (FERRÁNDIZ, 2011:679). Junto a esto, Francisco Espinosa hace hincapié a la problemática que hace años presentaba acceder a los archivos militares así como las dificultades para acceder a la información de otras instancias como la Dirección General de Registros para los libros de defunciones de los juzgados y de la Fiscalía General del Estado para la Causa General. Así, por ejemplo, *“para acceder al Servicio Histórico Militar se requería un aval de un militar o un personaje ilustre”* (ESPINOSA, 2010:19). Una situación que contribuyó sobremanera a que durante años no existiesen apenas investigaciones sobre el tema lo que significaba *“reducir a la mínima existencia las pesquisas sobre el pasado oculto”* (ESPINOSA, 2010:20). Con ello, se fomentaba así el olvido y el silencio de ese pasado negro, conseguir que aquellas pruebas del pasado se pudriesen en los archivos provocando que fueran los propios ciudadanos los que, por su cuenta, se buscasen la vida para indagar y conocer ese pasado. En palabras del hispanista alemán Walter Bernecker:

“Con su ahistoricidad, la socialdemocracia española continuó la pérdida de memoria del pueblo impuesta en tiempos de Franco. En ambos casos, la marginalización y el desplazamiento de la historia sirvió para estabilizar las relaciones de poder existentes” (citado en ESPINOSA, 2010:21).

En la actualidad, aún existen dificultades e impedimentos para poder acceder a la información completa de la situación vivida durante esos tiempos oscuros. Aún existe temor, por parte de testimonios, de lo que les podría pasar si hablasen. Un ejemplo de ello es el caso de un testimonio cuyos conocimientos sobre la localización de las fosas y los sucesos acontecidos en la zona de Cádiz se perderán con su muerte. El motivo: su silencio. Un ejemplo de las dificultades que conlleva las tareas históricas cuando se enfrentan a acontecimientos que aún siguen presentes en la vida de los españoles. En este sentido, *“es muy probable que de no haber existido por parte de algunos el firme propósito de que el terror fascista no quedara silenciado y olvidado para siempre, a estas alturas estaríamos aún manejando las cifras exactas que el general Salas Larrazábal nos dejó en 1977 como herencia de lo que fue la historiografía franquista que él tan elegantemente personificaba” (ESPINOSA, 2010:17).* Unas cifras que infravaloraban las consecuencias reales de lo acontecido.

En conclusión tanto arqueólogos como antropólogos forenses e historiadores han contribuido a poner no sólo *“números a las víctimas de genocidios como la represión franquista, sino también sus rostros” (MONTERO, 2009:304).* Un pasado oculto que ha tenido importantes implicaciones psicológicas para las familias que no han podido concluir las etapas de superación por la pérdida de un familiar. Un proceso de duelo que de perdurar en el tiempo, impide poder llevar una vida normal. De ahí la importancia de que las heridas cicatricen, de no hacerlo se mantiene el conflicto y, en definitiva, el recuerdo y la tristeza.

Finalmente no podemos obviar las implicaciones judiciales y, utilizando las palabras de Francisco Ferrándiz, *“Desde el punto de vista de muchos actores sociales implicados en las exhumaciones, reabrir las fosas forma parte de un ejercicio básico de justicia y “dignificación”, al mostrar la magnitud y sistematicidad de la represión y revertir una situación insostenible de disposición “infrahumana” de los cadáveres de las personas fusiladas, cristalizada en la expresión “tirados” o “enterrados como perros”, usada con frecuencia para justificar las exhumaciones” (FERRÁNDIZ, 2009:62).* Unas

políticas de dignificación que están incorporando elementos del derecho transnacional como el concepto de “*crímenes contra la humanidad*” (FERRÁNDIZ, 2009:62).

Unas exhumaciones que han sufrido durante los últimos años un proceso de judicialización cuyos orígenes se encuentran en las propuestas y lentos avances de lo que el 27 de diciembre de 2007 se convertiría en la Ley 52/2007 conocida como la Ley de Memoria Histórica aprobada con el visto bueno de todos los grupos parlamentarios exceptuando al PP y ERC. Una Ley que “ (*...*) *ignoraba las principales demandas, tales como que el Estado asumiese la localización y exhumación de las fosas; la anulación de las sentencias dictadas por la maquinaria judicial militar franquista a consecuencia de la sublevación y la guerra civil; la creación de un gran archivo de la represión, que reuniese toda la documentación civil y militar dispersa por el país, la mayor parte de ella en condiciones inapropiadas y con todo tipo de problemas para su correcta conservación y uso, y la transformación del Valle de los Caídos en un centro dedicado a conservar la memoria del trabajo esclavo*” (ESPINOSA, 2010:24). A pesar de no satisfacer las demandas, sí propició por primera vez en España un marco legal que “*posibilitó una cierta política de la memoria, planteó la eliminación de símbolos y reliquias franquistas, intentaba facilitar el acceso a la documentación relacionada con la guerra civil y transformó el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca en el Centro Documental de la Memoria Histórica*” (ESPINOSA, 2010:24).

Una política de memoria que, a diferencia de las aplicadas por el régimen franquista, ha sufrido muchos recortes presupuestarios como la reducción en 2012 del 60% o en el año 2013 cuando el gobierno de Mariano Rajoy eliminó la partida del Presupuesto General del Estado. Esto dejaba en evidencia que, con la llegada al gobierno del PP, la ley ha llegado a una vía muerta, una derogación de facto de ésta y un freno a las políticas de memoria histórica. Como dejó claro José María Aznar en el diario electrónico *Libertad Digital* del 26 de noviembre de 2011: la Ley de Memoria Histórica era un grave error llevado a cabo por un gobierno socialista que elimina el pacto de la transición democrática. Así el presidente del gobierno defiende que tanto el movimiento de recuperación de la memoria como la Ley antes mencionada pretenden liquidar el llamado *espíritu de la Transición* promoviendo la aparición de las *dos Españas*, es decir, “*fomentando una especie de guerracivilismo de nuevo cuño*” (FERRÁNDIZ, 2011:673).

Una transición a la democracia en la que subyace el famoso pacto de olvido que sobre la premisa de dejar la guerra atrás y clausurarla como pasado, fundó uno de los elementos culturales de la democratización: “la reconciliación nacional”. Así, se *“renunció a acciones oficiales de restitución, homenaje y reparación a las víctimas, de pedagogía histórica y de resignificación y conservación de los lugares de la memoria. Una renuncia institucional a restituir y reparar en sus diferentes formas la “dignidad” a los otros caídos, a los que nunca nadie rindió homenaje alguno. Una renuncia a política alguna de la memoria que, amparada en esa reconciliación nacional, dejaba intactos símbolos, físicos o no, de la guerra y la dictadura, en su afán de no herir sensibilidades ni reabrir heridas”* (RODRIGO, 2004:209). Un pacto tácito para silenciar las voces del pasado, aquellas voces incómodas que no podían olvidar los asesinatos, los fusilamientos, los encarcelamientos, en definitiva, el terror y la represión. El objetivo principal era evitar la reaparición de viejos rencores de la guerra que muchos sostenían, *“había dejado unas huellas indelebles que, en condiciones críticas, pudieran llegar a entorpecer la convivencia pacífica de la sociedad”* (AGUILAR, 1996:22). Una política de amplia amnistía sobre los delitos políticos y así impedir posibles represalias y venganzas por motivos religiosos, sociales o políticos (JULIÀ, 1999:39).

En este contexto, centenares de fosas comunes dejadas por la política represiva de Franco fueron un *secreto público*, que durante la transición a la democracia persistieron *“como bombas de relojería enterradas en paisajes familiares, relegadas por las leyes de amnistía y los nuevos consensos políticos emergentes”* (FERRÁNDIZ, 2011:672). Bombas de relojería que no quedaron desactivadas como lo demuestra el impacto y la intensa polémica que han suscitado en los últimos años su localización y exhumación así como la gestión de las actuaciones relacionadas con ellas, y que ponen de relieve la carga simbólica y política que aún hoy atesoran (FERRÁNDIZ, 2011:672).

Otro de los importantes acontecimientos jurídicos al que se debe hacer mención con respecto a las exhumaciones, se produjo el 1 de septiembre de 2008 cuando el juez Baltasar Garzón lanzó lo que la prensa consideró *“la mayor investigación sobre los desaparecidos del franquismo”* (ESPINOSA, 2010:24). Una convulsa tormenta judicial desatada con las declaraciones del juez Garzón declarándose competente para juzgar los crímenes del franquismo. Un itinerario judicial iniciado cuando *“diversas asociaciones interpusieron demandas en el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Baltasar Garzón, solicitándole que se declarara*

competente para investigar y juzgar presuntos delitos de detención ilegal fundamentalmente por la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de la Guerra Civil y los siguientes de la posguerra (FERRÁNDIZ, 2009:64).

Así, ante toda oposición, el 16 de octubre de 2008 el juez aceptó un auto donde consideraba que durante la Guerra Civil y el franquismo, *“se habían producido graves violaciones de derechos asimilables a la categoría jurídica de crímenes de lesa humanidad y mantenía que el procedimiento de desapariciones forzadas fue usado sistemáticamente para entorpecer la identificación de las víctimas e impedir la actuación de la justicia hasta el día de hoy”* (FERRÁNDIZ, 2009:65-66). Un auto que suscitó un gran torbellino mediático y que, el 26 de mayo de 2009, llevó a la Sala Penal del Tribunal Supremo a abrir un proceso al juez Garzón por un delito de prevaricación. Su acusación estaba justificada por el hecho de haber iniciado y prolongado unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional. De todas formas, a pesar de las dificultades y los desgastes sufridos por las distintas asociaciones durante el proceso, el trabajo continúa sin pausa *“decantándose hacia el amparo de esquemas transnacionales de justicia”* (FERRÁNDIZ, 2009:67-68).

En conclusión las exhumaciones han dejado al descubierto las evidencias de una represión franquista que fue negada durante mucho tiempo. Unos rastros más que evidentes caracterizados por los esqueletos de los cadáveres arrojados en las fosas comunes de una manera ilegal y clandestina. La recuperación de una memoria que, durante la transición española, fue víctima de su política del olvido. Una memoria olvidada que se justificaba a partir de un temor a un nuevo enfrentamiento civil. Pero, en mi opinión, resulta una falacia debido a que más que defender un posible bien común beneficiaba a un único bando. Me sorprenden las dificultades que conlleva la exhumación de las fosas comunes en materia económica o política. Tristeza ante la negación por parte de las Administraciones Públicas de recursos que permitan encontrar a ciudadanos que desaparecieron. La molestia que conlleva a para algunos una realidad, esa realidad que han intentado negar largo tiempo. En definitiva, unas fosas comunes que han generado, y siguen generando, la necesidad de dar respuesta a las demandas de

algunos sectores de la sociedad civil y que se van convirtiendo en un sentido común democrático (FERRÁNDIZ, 2009:78-79).

4. CONCLUSIONES

Como hemos dicho al inicio del trabajo, el principal objetivo es realizar un análisis historiográfico sobre uno de los temas que ha suscitado y, sigue suscitando en la actualidad, un intenso debate: las fosas comunes. Tumbas colectivas que contienen los restos de aquellos que murieron víctimas de la represión. Un tipo de inhumación que representa una prueba irrefutable de la barbarie y que fue utilizado, por el bando franquista, como un instrumento pedagógico que extendió el miedo a la población. Una forma de castigo que principalmente perseguía el olvido, borrar a los vencidos de la faz de la tierra y ocultarlos para siempre del recuerdo.

En una sociedad con fuertes creencias en la pervivencia del espíritu tras la muerte, una cultura que almacena sus muertos en lugares revestidos de respeto y dignidad denominados cementerios, donde continuamente se hacen ofrendas florales y oraciones en memoria de los difuntos, resulta traumático los asesinatos de los cuales se ignora el lugar de inhumación y que, en el peor de los casos, ni siquiera fueron inscritos en el registro civil. De ahí el sentimiento perturbador que generan las imágenes de las montañas de cuerpos y esqueletos que presentan signos de tortura y heridas de bala. En este sentido la historiografía de los últimos años, ha dado pasos muy importantes en la documentación y el análisis de las múltiples violencias que se acontecieron en este contexto bélico y durante la posguerra. Unas acciones represivas que, en mi opinión, no fueron equiparables entre un bando y otro. Mientras que en la zona insurgente la represión y la muerte fueron utilizadas para la construcción de un nuevo poder, los asesinatos de la República fueron consecuencia del hundimiento del Estado. Pero tampoco lo fueron el tratamiento que recibieron las víctimas. El régimen franquista practicó una política de la memoria desde el primer día de la guerra civil adueñándose del espacio público, cambiando los nombres de calles y plazas, construyendo grandes monumentos con la finalidad de legitimar su lucha, de legitimar un régimen dictatorial centrado en la figura y los intereses de unos pocos. Un culto mortuario que fue uno de los aspectos más importantes de la política de la memoria llevada a cabo por el régimen. Un culto a los *Caídos por Dios y por España* de cuyo ritual formaban parte las exhumaciones de cadáveres, procesiones, inscripciones en paredes de iglesias o

parroquias, o beatificaciones. Una política de la memoria que eliminó el recuerdo de aquellos que no se encuadraban en la tradición del régimen, unos vencidos que fueron víctimas del olvido, que sufrieron la represión, que vivieron un castigo permanente por el simple motivo de pensar diferente.

Un olvido que continuó después de la muerte de Franco y con el inicio de la transición a la democracia. Tal vez el motivo fuese que los mismos que se habían mantenido al lado del dictador, decidieron que el mejor modo de implantar una democracia sería una amnistía general que evitase el resurgir de antiguos rencores. Pero las estatuas siguieron ahí, los vencedores continuaron dignificados y recordados, los asesinos continuaron paseando por las calles sin que nadie les señalase y les pidiese explicaciones por sus actos, los familiares de los asesinados continuaron con la vergüenza de haber cometido el mayor de los delitos, continuaron con el silencio y el miedo.

En mi opinión, una sociedad democrática no puede permitirse tener miles de personas desaparecidas, muertas por defender una ideología diferente, por apoyar una revolución que les permitiese mejorar sus condiciones de vida. Mientras existen referencias de la dictadura a lo largo y ancho de la geografía española, aún hay familias que no saben donde están sus abuelos, hermanos, tíos, etc. En definitiva, es difícil justificar que, tras los crímenes cometidos, los asesinos no recibieran su castigo. Es difícil pensar en una democracia que permita olvidar y silenciar el sufrimiento de las personas, que ponga obstáculos al conocimiento, de una realidad que por mucho que intenten ocultar sigue estando ahí, en cada piedra, en cada tramo de tierra, en cada cuneta. Personas que siguen esperando que algún día sus nombres, enterrados bajo tierra, salgan a la luz y puedan ser inhumados como se merecen. En definitiva, bombas de relojería enterradas en paisajes familiares y que han sido relegados al silencio.

En la actualidad, las exhumaciones han generado un intenso debate sobre la naturaleza de la memoria colectiva, las tensiones entre la historia y la memoria, sobre si la represión llevada a cabo durante la guerra y la posterior dictadura ha sido insuficientemente estudiada o lo ha sido en exceso, si ha sido rememorada hasta la extenuación o si, por el contrario, olvidada de forma consciente. Una incidencia que ha llevado a la creación de equipos más o menos estables de expertos en sus disciplinas así como la elaboración de protocolos técnicos destinados a normalizar los procedimientos de excavación e identificación.

Sumado a su incidencia esta la Ley de Memoria Histórica. Una Ley cuya prioridad es localizar a las personas desaparecidas y hacer efectivo los derechos de sus familiares a tener información sobre el destino de sus seres queridos. Una ley que, a pesar de no cumplir las expectativas que suscitó en sus inicios, ha significado un paso importante para sacar a la luz la barbarie que asoló nuestro país y que representa un doloroso y triste recuerdo. Un debate abierto sobre la importancia o no de las exhumaciones de aquellos que creyeron olvidados, si las exhumaciones suponen reabrir viejas heridas y poner entredicho un proceso de transición o si, por el contrario, significa aceptar un pasado oscuro y silenciado permitiendo que aquellos recuerdos sean escuchados.

En definitiva desde que en el año 2000 se exhumara la fosa de los “Trece de Priaranza”, las imágenes de la represión han suscitado un debate abierto sobre la exhumación o no de aquellos que creyeron olvidados, sobre si las exhumaciones conllevan reabrir viejas heridas y poner entredicho el proceso de transición a la democracia.

El 15 de julio de 2012 fue una fecha clave en mi carrera profesional. Participé como voluntaria en la exhumación de, aproximadamente, 28 cadáveres fusilados en la zona de Cádiz. Al iniciar las excavaciones mi interés por las tareas arqueológicas relacionadas con la muerte fue aumentando y, principalmente, el interés por la exhumación de aquellas personas sin nombre. Eran hombres y mujeres que habían sido asesinados y que fueron víctimas de una represión ejercida en la zona por el bando sublevado. Las historias contadas por los familiares de aquellos que fueron asesinados, me trasladó un sentimiento de tristeza mezclado con miedo y enfado.

No era consciente de la multitud de cadáveres ocultos bajo tierra incluso después del final de la dictadura franquista. Pero, sobre todo, me resulto difícil entender que un sistema democrático no hubiera llevado a cabo una profunda investigación sobre este periodo y permitiera a sus familiares poder acabar con un duelo que duraba ya muchos años. Me resulta inusitado que, algunos consideren las exhumaciones como una forma de reabrir viejas heridas ya cerradas cuando la realidad ha demostrado que aún siguen vivas. Una realidad cuyas imágenes, llenas de cadáveres con signos evidentes de violencia, necesitan salir a la luz. Imágenes que, tal vez, han pasado de crear sorpresa a formar parte de la cotidianidad pero que, siguen siendo, en mi opinión, incómodas pruebas de una barbarie que no puede ser silenciada por más tiempo.

5. BIBLIOGRAFÍA

- AGUILAR FERNÁNDEZ, Paloma. *Memoria y olvido de la guerra civil española*. Alianza editorial. Madrid: 1996.
- BEEVOR, Anthony. *La Guerra Civil Española*. Editorial Crítica. Barcelona: 2005
- CASANOVA, Julián. *República y guerra civil vol.8*. Editorial Crítica/Marcial Pons. Madrid: 2007
- CASANOVA, Julián (comp.). *Guerras Civiles en el siglo XX*. Editorial Pablo Iglesias. Madrid: 2001.
- CASANOVA, Julián (entre otros). *Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco*. Editorial Crítica. Barcelona: 2004
- CHOMSKY, Noam. *L'objectivitat i el pensament liberal. Els intellectuals d'esquerres davant la Guerra de Vietnam i la Guerra Civil española*. Grup Editorial 62. Barcelona: 2004
- CLARA, Josep. *El misteri de la mort del Bisbe Irurita. Estat de la qüestió i noves dades*. Annals de l'Institut d'Estudis Gironins. Vol. XLIX. 2008. Girona MMVIII.
- DI FEBRO, Giuliana y JULIÀ, Santos. *El franquismo*. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona: 2005
- ESPINOSA MAESTRE, Francisco: *Violencia roja y azul: España, 1936-1950*. Editorial Crítica, Barcelona: 2010
- ESPINOSA MAESTRE, Francisco: de saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar. *Revista de historia contemporánea Hispania Nova*, nº7(2007).
- ESPINOSA MAESTRE, Francisco. *Contra el olvido. Historia y memoria de la guerra civil*. Editorial Crítica. Barcelona:2006
- ETXEBERRIA, Francisco (ed.): *Antropología forense de la guerra civil española*. Edición especial del Boletín Galego de Medicina Legal e Forense, nº18(2012).
- ETXEBERRIA, Francisco: Exhumando fosas, recuperando dignidades. *Biblid 1989-2012*, nº9(2008), pp. 137-158
- FERRÁNDIZ MARTIN, Francisco. Exhumaciones y políticas de la memoria en la España Contemporánea. *Revista de Historia contemporánea Hispania Nova*, nº7 (2007)

FERRÁNDIZ MARTIN, Francisco. Exhumaciones y relatos de la derrota en la España actual. *Dossier: guerra civil: las representaciones de la violencia*, nº84 (2009), pp. 135-161

FERRÁNDIZ MARTÍN, Francisco: Autopsia social de un subterráneo. *Isegoria: revista de Filosofía moral y política*, nº45 (2011), pp. 525-544

FERRÁNDIZ MARTIN, Francisco: De las fosas comunes a los derechos humanos: el descubrimiento de las desapariciones forzadas en la España contemporánea. *Revista de Antropología social*, nº19 (2010), pp. 161-189

FERRÁNDIZ MARTIN, Francisco: fosas comunes, paisajes del terror. *Revista de Dialectología y tradiciones populares*. Vol. LXIV, nº1 (2009), pp. 61-94

FERRÁNDIZ MARTIN, Francisco. Gritos y susurros: exhumaciones y relatos de la derrota en la España actual. *Revista de estudios extremeños*. Tomo LXVII, nº11(2011), pp. 667-700

GARRIOT BALLBE, Ermengol: arqueología de un silencio. Arqueología forense de la guerra civil y del franquismo. *Complutum*. Vol 19. nº2 (2008), pp. 119-130

HERR, Richard. *España Contemporánea*. Ediciones de Historia SA. Madrid: 2004

JULIÀ, Santos: “*Hoy no es ayer. Ensayos sobre la España del siglo XX*”. Editorial RBA Libros SA. Barcelona: 2010

JULIÀ, Santos (coord.). *Víctimas de la Guerra Civil*. Editorial temas de hoy. Historia. Madrid: 1999

MONTERO GUTIERREZ, Juan: La visibilidad arqueológica de un conflicto inconcluso. La exhumación de fosas comunes de la guerra civil española a debate. *Revista Munibe (Antropología-Arkeologia)*, nº60 (2009), pp. 289-308

PRESTON, Paul. *El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después*. Editorial Debolsillo. Barcelona: 2013

REIG TAPIA, Alberto. *Violencia y Terror*. Editorial Akal Universitaria. Madrid: 1990

RODRIGO, Javier: *Hasta la raíz. Violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista*. Editorial Alianza. Madrid: 2008

SALLÉS, N y LÓPEZ, Josep Maria. *Les fosses de la memoria. ¿Per què cal desenterrar la historia?* Rubrica editorial. Barcelona:2007

SILVA, E. y MACIA, S.: *Las fosas de Franco. Los republicanos que el dictador dejó en las cunetas*. Ediciones Temas de Hoy SA, Madrid: 2003

SOLÉ I BARJAU, Q: “*Els morts clandestins. Les fosses comunes de la Guerra civil a Catalunya (1936-1939)*”. Editorial Afers. Barcelona: 2008

SOLE I BARJAU, Q: Rastres de mort. Les fosses comunes de la guerra civil. *Revista Afers*, nº56 (2007), pp. 61-73

SOLE I BARJAU, Queralt: Soldats perpetuats en l’oblit, Cercles. *Revista d’història cultural*, nº11 (2008), pp. 183-200

TERRERO, J.; REGLÀ, J.: “*Historia de España. De la prehistoria a la actualidad*”. Editorial Óptima. Barcelona: 2002

TUSELL, J: “*Historia de España en el siglo XX. II. La crisis de los años treinta: República y Guerra civil*”. Editorial Taurus. Madrid: 1998

VILAR, P. *La Guerra Civil Española*. Editorial Crítica. Barcelona: 1988